- EN LO PRINCIPAL** : Comparece en calidad de tercero coadyuvante de la reclamante, haciendo presente hechos que indica.
- PRIMER OTROSÍ** : Acompaña documentos.
- SEGUNDO OTROSÍ** : Señala forma especial de notificación.
- TERCER OTROSÍ** : Se tenga presente.

ILUSTRE PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL DE ANTOFAGASTA

Carlos Claussen Calvo, abogado, domiciliado en calle Latorre N° 2579, Of. 201, de esta Ciudad de Antofagasta, actuando en representación de la **ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE LA HIGUERA** (“AGREMA LA HIGUERA” o la “Asociación”), persona jurídica de carácter gremial, RUT N°71.591.900-1, domiciliada en la localidad de La Higuera, Cuarta Región, en los autos sobre reclamación caratulados “**ANDES IRON SPA CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**”, **ROL R-95-2023**, a SS.I. con respeto digo:

Que, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 18 de la Ley N°20.600 que, “Crea los Tribunales Ambientales”, el cual hace aplicable a los procedimientos de reclamación ante los tribunales ambientales, lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, comparezco en representación de AGREMA LA HIGUERA, invocando la calidad de tercero coadyuvante de la reclamación de Andes Iron SpA, alegando interés actual en los resultados de la presente reclamación, según se acreditará, y solicitando se acoja en todas sus partes la reclamación judicial que da origen a estos autos, todo ello en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que procedo a exponer:

§ I.- INTERÉS ACTUAL DE LA AGREMA LA HIGUERA EN EL RESULTADO DE ESTA RECLAMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, mis representadas alegan un interés actual en el resultado de la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron SpA (“Reclamante”) en contra de la Resolución Exenta N°202399101517 del 29/6/2023 de la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaria del Comité de Ministros que, calificó de manera

ambientalmente desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Dominga” cuyo proponente es Andes Iron SpA.

Hago presente que esta presentación es consistente con las actuaciones procesales previas desarrolladas en el marco de los procesos judiciales Rol R-1-2017 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y Rol N°36.972-2021 de la Excma. Corte Suprema, los cuales también versaron sobre la aprobación del proyecto Dominga. En tales casos, tanto este Ilustre Tribunal¹, como la Excma. Corte Suprema² reconocieron el interés de nuestra Asociación y la tuvieron como tercero coadyuvante. Mismo interés gremial que se manifiesta en esta nueva iteración judicial del proyecto Dominga.

El referido interés actual de mis representadas se demuestra con los siguientes hechos:

I.1. La Reclamante es actualmente socia de la AGREMA LA HIGUERA, organización que tiene por objetivo el desarrollo y la protección de las actividades propias de la Minería

Tal como se demuestra con el certificado acompañado en Otrosí de esta presentación, la empresa Andes Iron SpA es socio de la AGREMA LA HIGUERA desde el 3 de septiembre 2014, habiéndosele asignado el número 422 en el registro de socios respectivos.

La Asociación se constituyó el 24 de junio de 1989 y sus estatutos se encuentran aprobados por el Ministerio de Economía, su domicilio se encuentra en la Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Cuarta Región y agrupa a los mineros de la zona.

Entre los objetivos de la AGREMA LA HIGUERA, conforme al artículo 4° de sus estatutos, se encuentra:

“(...) la racionalización, el desarrollo y la protección de las actividades propias de la Minería, o de quienes cumplen funciones afines, entendiéndose dentro de estos objetivos generales, la difusión de los principios y responsabilidad relacionadas con las funciones profesionales de sus

---

¹ Mediante la Resolución del 22 de enero de 2018 que consta a fojas 1738 en la causa rol R-1-2017 del Primer Tribunal Ambiental.

² Mediante la Resolución de 8 de junio de 2021 que consta a fojas 0 en la causa rol N°36.972-2021 de la Excma. Corte Suprema.

asociados, la promoción de su perfeccionamiento moral y técnico, como asimismo su bienestar social y cultural (...)”

La Asociación posee interés gremial en que el proyecto minero Dominga sea aprobado ambientalmente, atendido que es desarrollado por un miembro asociado a tal organización, la cual se encuentra obligada a cumplir con su principal obligación gremial, esto es, desarrollar y proteger la actividad propia de la minería.

I.2. La Asociación -reconocida como actor influyente en la actividad minera de la IV Región- se encuentra obligada a defender el proyecto minero más importante de las últimas décadas

Tal como la literatura especializada ha reconocido³, AGREMA LA HIGUERA es actor principal e influyente en el desarrollo de la actividad minera de la IV Región. Es pertinente señalar que la Asociación Gremial Minera de La Higuera es la única organización gremial minera existente en la comuna de La Higuera.

A su vez, la actividad que justifica la existencia de mi representada -la minería- NO ES OTRA CUALQUIER ACTIVIDAD MÁS en dicha comuna, SINO QUE ES LA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE DE LA MISMA, aquella que le dio origen históricamente y respecto de la cual se albergan las esperanzas de un mejor porvenir económico en el futuro. Así se ha señalado expresamente en el plan Regulador Comunal de La Higuera, promulgado el **29 de Abril de 2020**, al establecer, como primer “*criterio de Sustentabilidad*” de la comuna, “*el desarrollo económico, social y educacional de sus habitantes apoyada en **la actividad minera, históricamente la principal actividad económica de la comuna***”.

Por ello, no resulta hipérbole alguna el señalar que los intereses de mi representada coinciden con los intereses de toda la comuna de La Higuera.

En dicha posición, mi representada está obligada a intervenir en la presente controversia judicial, pues, por un lado, la aprobación ambiental del proyecto minero Dominga se ha convertido en el conflicto minero-ambiental más importante de las últimas décadas en la región, al menos, desde el cierre

---

³ Considérese la tesis doctoral del Doctor Edison Ramírez Oliveres, “Análisis de la problemática de las PYMES de la industria minera de la IV región de Chile Estudio de actores participantes mediante ARS y ANP” del 2015, disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/58667?show=full>

del mineral El Tofo en 1974; y, por el otro, mis mandantes consideran que el proyecto se evaluó ambientalmente de una manera técnicamente correcta y es, no solo eficiente, sino también sustentable. En relación con esto último, en especial habida consideración del desarrollo sustentable que se prevé generará el proyecto tanto para los habitantes de la comuna de La Higuera, como para los demás miembros partícipes de las instituciones gremiales que represento.

I.3. La Asociación, sus socios y la comunidad en general, se beneficiarán directamente de la aprobación ambiental y posterior ejecución del proyecto Dominga

La aprobación ambiental y consecuente ejecución del proyecto Dominga, es capaz de producir importantes beneficios tanto para las asociaciones gremiales que represento como sus miembros. Ello, porque podrán integrar el *cluster* minero que producen los grandes proyectos, integrando la cadena productiva que beneficia a los sujetos que participan en las distintas fases.

En particular, los pequeños y medianos productores podrán vender la producción de minerales extraídos afines al proyecto Dominga a la empresa titular, quien ha señalado públicamente la apertura de un poder de compra. Esto además, disminuiría significativamente los costos de flete de los productores, en especial, considerando que el actual poder de compra más cercano en la zona, corresponde a la Empresa Nacional de Minería (“ENAMI”), la cual dista a 141 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la ciudad de Vallenar. Por ello, además del costo de transporte propio de dicho trayecto, se suman los peajes existentes en las localidades de Punta Colorada y Cachiyuyo.

Adicionalmente, nos interesa destacar que, la materialización del proyecto también supone la completa ejecución del Acuerdo Marco, contrato suscrito entre Andes Iron SpA y la comunidad que integra la mesa comunal de la Higuera y que fue especialmente valorado por este Ilustre Tribunal Ambiental en su sentencia de 16 de abril de 2021, en la causa rol R-1-2017.

No podemos dejar de resaltar que el mismo, obliga a Andes Iron SpA. a proporcionar recursos para nivelación en materia educacional y solucionar la escasez hídrica que afecta a la comuna. Todos bienes sociales relevantes

que estimamos contribuyen significativamente al rubro minero y benefician a la comunidad en general. Pero también, resultan claves para mejorar la calidad de vida de parte de los miembros de AGREMA LA HIGUERA, quienes mantienen una economía de subsistencia por la explotación de sus respectivas pertenencias.

§ II.- RAZONES POR LAS QUE LA RECLAMACIÓN DEBE ACOGERSE

Si bien las razones ya indicadas por la reclamante Andes Iron SpA nos parecen técnica y legalmente acertadas, argumentos que por economía procesal damos por expresamente reproducidos, conocidos y válidos, nos interesa señalar algunas razones adicionales, conforme a las cuales estimamos este Ilustre Tribunal debe acoger la reclamación de la empresa Andes Iron SpA.

Estas se resumen en una idea simple pero fundamental. El Comité de Ministros en la decisión impugnada de autos, sostuvo una tesis que pone en jaque a la institucionalidad ambiental, afectando gravemente el Estado de Derecho.

Además, termina por convertir en una quimera el hecho de que, apegándose a la legalidad, la industria minera pueda desarrollarse de una manera sostenible y sustentable.

Con este último concepto, nos referimos al desarrollo que combina equilibradamente tanto el progreso material y la creación de las condiciones materiales para mejorar la calidad de vida, con el respeto y adecuado cuidado del medioambiente. Alternativamente, un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes (y, por tanto, no prescinde de ellas) y no compromete las necesidades de las generaciones futuras, como precisamente promueve el proyecto Dominga.

Ello, pese a que tal clase de desarrollo es un imperativo que trasunta el derecho internacional, nacional e incluso la ética⁴.

---

⁴ Al respecto, solo a modo referencial cabe señalar que dicho equilibrio se puede encontrar tanto en los principios 8, 9 y 11 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio humano de 1972, en el informe Nuestro Futuro Común elaborado por la Comisión Brundtland, en el principio 27 de la Cumbre de la Tierra o de Río de Janeiro, la declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo sostenible en 2002, la encíclica papal Laudato Si, y el artículo 2 g) de la Ley N°19.300.

II.1. La decisión del Comité de Ministros niega el valor de las sentencias de los tribunales ambientales

SS.I. no se puede obviar una incómoda realidad, esta no es la primera, ni la segunda, sino la tercera oportunidad en que este Ilustre Tribunal Ambiental va a tener que pronunciarse en relación con la evaluación ambiental del proyecto Dominga.

Ya lo hizo, primero en su sentencia definitiva del 27 de abril de 2018, luego en su sentencia definitiva del 16 de abril de 2021⁵. Decisiones que, por lo demás, derivaron en que la controversia fuese vista por la Excma. Corte Suprema también en dos ocasiones y que, como tal, derivó en dos sentencias definitivas, esto es, aquella pronunciada el 26 de septiembre de 2019⁶ y el 18 de mayo de 2022⁷.

Lo anterior, no es meramente anecdótico, sino que se debe a que, el Comité de Ministros, en definitiva, se comportó como si la última sentencia dictada por este Ilustre Tribunal Ambiental, simplemente no le fuera obligatoria.

Resulta elocuente el siguiente fragmento de su resolución refiriéndose a dicha decisión ***“no es posible sostener que haya materias que se encuentren zanjadas en el fallo, y respecto de las cuales la COEVA no pudiera pronunciarse”***⁸ (énfasis de la cita original). Idea que, por lo demás reiteró el Servicio de Evaluación en su informe en la presente causa, al señalar que: *“la Reclamante sustenta su teoría del caso en una premisa errada esto es, que la sentencia de este Ilustre Tribunal habría establecido o “zanjado” ciertas materias”*⁹ (énfasis agregado).

SS. Ilustres, basta mencionar el más que centenario artículo 3 inciso segundo del Código Civil, para recordar que, aunque ciertamente las decisiones de los tribunales de justicia no tienen un efecto general como lo posee la ley, ciertamente poseen fuerza plenamente obligatoria en los casos particulares.

A su vez, que las decisiones definitivas de los tribunales de justicia sean capaces de zanjar materias en disputa, es precisamente la razón de ser de

---

⁵ Ambas en la causa R-1-2017 de este Ilustre Tribunal Ambiental.

⁶ En causa rol de la Excma. Corte Suprema N°12.907-2018.

⁷ En causa rol de la Excma. Corte Suprema N°36.972-2021.

⁸ Comité de Ministros, Resolución Exenta N°202399101517/2023, considerando 13.1.2.1.

⁹ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a fojas 289 en la presente causa.

un sistema heterocompositivo de solución de controversias que, por lo demás, en este caso es técnicamente especializado al haber sido entregado a los tribunales ambientales.

La noción jurídica que mejor recoge la misma idea anterior es la cosa juzgada. Al respecto, tal como señala la literatura:

“el fin que las partes persiguen en el proceso es obtener la dictación de una sentencia del juez que venga a zanjar en definitiva las dificultades de orden jurídico que existen entre ellas, de que lo resuelto no pueda discutirse más, ni dentro del mismo proceso ni en otro futuro (...) la cosa juzgada presente una doble característica: es coercitiva, pues el vencido está obligado a cumplir la condena que se le ha impuesto, y en caso de que no lo haga voluntariamente, el vencedor podrá exigírselo por medios compulsivos; y es inmutable en el sentido de que las partes deben respetar lo resuelto y no pueden renovar en un nuevo juicio la misma controversia”¹⁰ (énfasis agregado).

Es por ello, que resulta impresentable que la autoridad en este caso haya negado toda posibilidad de zanjar materias respecto de la decisión anterior de este mismo tribunal.

Atendido lo confusa que resulta la argumentación de la autoridad, podría señalarse que es imprecisa y que, no es que esta parte niegue todo valor a las decisiones de los tribunales especializados, sino que más bien, cual menú de libre elección, ha escogido qué parte atender y cuál no, de la misma. Pues, de hecho, a su entender *“[...] la sentencia impugnada reconoce importantes falencias del Proyecto que por sí solas ameritan el rechazo de éste”¹¹.*

SS.I., si este tribunal especializado hubiese considerado que el proyecto ameritaba el rechazo, no habría retrotraído el procedimiento, pues hacerlo habría sido por completo inoficioso.

En suma, el Comité de Ministros negó dos aspectos propios de la cosa juzgada que inviste la sentencia del Ilustre Primer Tribunal Ambiental.

---

¹⁰ Casarino Viterbo, Mario. Manual de Derecho Procesal. Derecho Procesal Civil. Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, página 126.

¹¹ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a fojas 328 en la presente causa.

Por un lado, la capacidad de zanjar asuntos y, por el otro, en abierta contradicción de lo dispuesto en el artículo 76 inciso primero de la Constitución Política de la República, la inmutabilidad de lo resuelto, reconsiderando o revisando los fundamentos y contenidos de su decisión.

Al hacerlo, el Comité se posicionó a sí mismo, sin mandato legal alguno que lo valide, en una posición decisoria superior a la de los tribunales ambientales, cuestión que como habíamos adelantado, daña la institucionalidad ambiental vigente y debilita al Estado de Derecho en su conjunto.

Mis representados son asociaciones gremiales que velan por el interés de una industria que tiene la legítima expectativa de que las decisiones judiciales se respetan. Aceptar que la propia institucionalidad ambiental subvierta lo decidido por los tribunales ambientales, ciertamente constituye una injusticia para el titular del proyecto Dominga, pero además establece un precedente dañino para toda la industria.

II.2. La decisión del Comité de Ministros convierte la evaluación ambiental en un trámite sin fin

Los miembros de la organización gremial que represento saben que el rubro minero es una industria altamente regulado. Resulta difícil encontrar otro sector regulado que, para desarrollar su actividad económica, deba someterse a tantas autorizaciones previas, con el consecuente costo monetario y temporal que ello implica.

No obstante, el caso del proyecto Dominga supera toda escala de razonabilidad. Simplemente no es tolerable, el proyecto ingresó a evaluación hace más de una década, obtuvo un informe consolidado de evaluación que recomendaba su aprobación en atención del mérito técnico del expediente hace más de seis años y lleva litigándose, la misma cantidad de tiempo¹².

Actualmente, se discute públicamente si la *permisología* vigente es razonable y, de hecho, el ejecutivo prepara un proyecto de reforma para efficientizar la regulación. En tal contexto, el caso del proyecto Dominga es un

---

¹² La reclamación judicial que inició el expediente de este Ilustre Primer Tribunal Ambiental R-1-2017 es del 1 de diciembre de 2017.

ejemplo paradigmático, atendidas las trabas institucionales que ha debido sortear.

El obstáculo que gatilla esta última iteración judicial, es la errada concepción del Comité de Ministros sobre los poderes que detentan los jueces ambientales. En sus palabras *“el Tribunal ambiental detenta dos grandes facultades: La primera, es **declarar la ilegalidad del acto**, es decir que este no se encuentra conforme a la normativa vigente, y la segunda, una vez declarada la ilegalidad, **anular el acto administrativo impugnado, total o parcialmente**”*¹³ (énfasis subrayado agregado). Misma interpretación que se refuerza en varios pasajes del informe del SEA acompañado a estos autos, en los que se indica que *“(...) la Ley N° 20.600 revela una clara intención por parte del legislador de reducir el margen de control que inicialmente se otorgaba a los jueces ambientales en Chile”*¹⁴ (...) *“la Ley N°20.600 tiene precisamente por objeto impedir que el juez ambiental reemplace a la Administración en su decisión final, estándole vedado resolver el fondo del asunto técnico”*¹⁵ y *“(...)la potestad de dictar órdenes de mayor intensidad, fue precisamente eliminada durante la tramitación legislativa de la Ley N° 20.600”*¹⁶.

Lo anterior, contraviene manifiestamente el texto de la ley N°20.600, pues el artículo 30 inciso primero establece que los jueces ambientales pueden disponer que se modifique el acto anulado, esto es, una facultad de orden a la administración, respetando el límite establecido en la misma norma, cual es, no reemplazar por sí contenidos discrecionales.

Atendido lo anterior, en abierta diferencia a lo sostenido por el Comité de Ministros, los jueces ambientales no detentarían dos facultades sino, al menos, tres y, es precisamente la consideración del poder omitido (la facultad de orden a la administración) por el Comité de Ministros, determinante en el caso del proyecto Dominga, que como dijimos previamente, ha sido objeto de dos sentencias ambientales.

El error del Comité de Ministros sobre los poderes de los jueces ambientales dista de ser una mera consideración académica o técnica, por el contrario, tiene efectos muy concretos. En particular, tal como anunciamos en

---

¹³ Comité de Ministros, Resolución Exenta N°202399101517/2023, considerando 13.1.2.1.

¹⁴ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a fojas 307 en la presente causa.

¹⁵ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a fojas 305 y 306 en la presente causa.

¹⁶ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a fojas 306 en la presente causa.

el título de esta sección, su omisión convierte la evaluación en un trámite sin fin.

Si las únicas facultades que detentan los jueces ambientales, como sostuvo el Comité de Ministros en la decisión impugnada, son declarar la ilegalidad y anular total o parcialmente el acto impugnado, sin poder establecer órdenes vinculantes a la Administración. No importa cuántas veces se zanje en tribunales la adecuada evaluación ambiental de un proyecto, el caso siempre volverá a la administración ambiental de turno, la cual podrá actuar como si no hubiese decisión judicial previa y, si le place, rechazarlo nuevamente, una y otra vez.

Dicho ciclo eterniza un escenario de permisos que, como adelantamos, ya está bajo cuestionamiento por su lentitud e ineficacia. Si se me permite una analogía literaria, el entendimiento del Comité de Ministros sobre cómo opera la institucionalidad ambiental y el control de los tribunales ambientales, convierte a los titulares en verdaderos Sísifos modernos, pues:

“Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”¹⁷

Mutatis mutandí, un proyecto minero, al enfrentarse a una evaluación ambiental, podrá esforzarse en cumplir con las consideraciones legales y técnicas, para arribar a una resolución de calificación ambiental aprobatoria e incluso lograr una validación judicial posterior, esto es, subir la roca hasta la cima. Sin embargo, siempre la administración de turno podrá hacer que todo comience desde cero, una vez más.

En definitiva, así entendida la evaluación ambiental, esta es un proceso absurdo y no hay industria que pueda sobrellevarla, el rubro minero no es la excepción.

---

¹⁷ Camus, Albert. El mito de Sísifo, Editorial Losada Buenos Aires, p 2.

II.3. La decisión del Comité de Ministros trasgrede abiertamente los plazos fatales establecidos por el legislador

La eternización de este proceso además se ve agravado por el entendimiento que tiene la administración sobre el cumplimiento de sus plazos. De manera un tanto displicentes el Servicio de Evaluación Ambiental señala que “[...] *los plazos de esta naturaleza no son fatales para la Administración*”¹⁸. Citando para ello la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Esta interpretación de los plazos se encuentra en clara pugna con la legislación ambiental, que expresamente señala “[...] *La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un **plazo fatal** de treinta o sesenta días contado desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental*”¹⁹. Esta es una de las pocas ocasiones, si es que no la única, en que la ley otorga un plazo FATAL a la administración. Por lo que dicha fatalidad no puede ser inocua para la administración.

Podemos entender SS Ilustre que la administración tenga cierto retraso en los procedimientos administrativos; que efectivamente no logre resolver en el plazo fatal de 60 días, pero lo que resulta inadmisibles es que lo haga en un plazo de un año y medio y que simplemente se escude en lo que ha señalado el ente contralor, sin siquiera considerar que en el caso de la evaluación ambiental el legislador sí pretendió que este plazo de 60 días fuese fatal.

Se debe considerar que el cumplimiento de los plazos no es un asunto que sea solo relevante para el titular de proyectos, también afecta enormemente a las comunidades involucradas, así como a la industria. Por ello asombra la liviandad con que la autoridad señala que los plazos no son fatales, cuando es la propia ley la que lo señala.

En resumen, Ilustre Tribunal, la decisión del Comité de Ministros es demoledora para la industria minera ya que sólo ofrece incertidumbre, incertidumbre de la validez de la evaluación técnica, incertidumbre de los plazos, incertidumbre de la validez de las sentencias dictadas por los

---

¹⁸ Informe del Servicio de Evaluación Ambiental, página 90.

¹⁹ Ley N°19.300, artículo 20.

tribunales de justicia, en definitiva, incertidumbre de nuestro Estado de Derecho.

POR TANTO,

A SS. I. SOLICITO: Se sirva tener a mi representada AGREMA LA HIGUERA, como tercero coadyuvante de la reclamante en estos autos y, en definitiva, acoja la reclamación de Andes Iron SpA en contra de la Resolución Exenta N°202399101517 de la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaria del Comité de Ministros, anulándola totalmente.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS. Ilustre tener por acompañados los siguientes documentos con citación:

- 1.- Copia de los Estatutos de la AGREMA LA HIGUERA, actualmente vigentes y acta N°2 de agosto de 1989, que la complementa y certificado del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que acredita su existencia.
- 2.- Copia del certificado que acredita que la empresa Andes Iron SpA es socio de la AGREMA LA HIGUERA desde el 3 de septiembre de 2014, habiéndosele asignado el número 422 en el registro de socios respectivos.
- 3.- Certificado de Título de Abogado del suscrito, de fecha 14 de diciembre de 2023 emitido digitalmente por el Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
- 4.- Copia de la escritura pública de fecha 17 de enero de 2018, otorgada ante el notario de Santiago Félix Jara Cadot, en que consta mi personería por la AGREMA LA HIGUERA.

POR TANTO,

SOLICITO A SS. I.: Tenerlos por acompañados.

SEGUNDO OTROSÍ: Señalo mi correo electrónico carlos@claussen.cl y/o carlos@claussenyvelasco.cl para la notificación de las resoluciones judiciales de autos.

POR TANTO

SÍRVASE SS. I.; Tener presente el correo señalado, para los fines indicados.

TERCER OTROSÍ: Sírvase SS. Ilustre tener presente que mi personería para actuar por mi representada "Asociación Gremial Minera de La Higuera" consta de la escritura pública de fecha 17 de enero del 2018, otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, acompañada en el Primer Otrosí; y que en

mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumo personalmente el patrocinio de esta gestión.